INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN.

Con fecha 28 de septiembre de 2023, se ha recibido el expediente relativo al *proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición de entidades colaboradoras a las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León*, para la emisión del informe previsto en el artículo 76.2 de la *Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León*.

De acuerdo con este precepto, a esta Dirección General le corresponde informar la memoria económica en la que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha de estimar los gastos y las previsiones de financiación, que se derivarán de la aprobación de este proyecto de Decreto, así como valorar los efectos en los Presupuestos Generales de la Comunidad, con el fin de asegurar, desde la fase de programación presupuestaria, el cumplimiento de los principios constitucionales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, en los términos regulados, tanto en la normativa básica estatal, como en la propia de la Comunidad, integrada por la *Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León*, y la *Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria*.

Objeto del proyecto de Decreto.

Es la regulación de los requisitos y el procedimiento para la obtención del reconocimiento como entidades colaboradoras, de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (en adelante OPAS), así como el régimen aplicable a tales entidades.

Con este fin, se regula el procedimiento para obtener este reconocimiento como entidad colaboradora, y los requisitos previstos para ello, entre otros, el de haber obtenido el reconocimiento como OPA más representativa en el ámbito de la Comunidad de acuerdo con la normativa reguladora; o bien que lo haya hecho en el ámbito de una o más provincias, obteniendo el reconocimiento de entidad colaboradora circunscrito a la provincia o provincias correspondientes. También se prevé el reconocimiento como entidad colaboradora a las federaciones o coaliciones de OPAS, cuando se hayan reconocido como OPA más representativa.

Se regula en el proyecto normativo las funciones como entidades colaboradoras de las OPAS que incluyen actividades de divulgación e información, servir de cauce para la cumplimentación de encuestas a efectos de recogida de datos que precise la administración para realizar estudios; elaborar estudios y/o análisis que sirvan para el diagnóstico de asuntos cruciales para la toma de decisiones en materia de política agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural; asesorar en la suscripción de seguros agrarios y agroalimentarios y en lo relativo a la constitución de titularidades compartidas y otras figuras societarias; prestar la formación adecuada, impartiendo cursos, seminarios y otras actividades similares; y editar y publicar libros o revistas que tiendan a la difusión de la política agraria de la Comunidad.

También se prevé que puedan colaborar en la tramitación de expedientes administrativos y realizar las actuaciones que, en materia de registros administrativos propios de los ámbitos agrario y/o agroalimentario, en el ámbito que permita la normativa aplicable.

El proyecto normativo prevé las obligaciones correspondientes de estas entidades colaboradoras y las causas de su extinción como tales, y recoge como mecanismos de colaboración la suscripción de convenios entre la Consejería competente- actualmente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural- y las entidades colaboradoras, donde se podrán concretar las funciones asumidas, los requisitos que debe cumplir y hacer cumplir y las medidas de comprobación y control que la Consejería se reservará sobre las funciones desarrolladas, añadiendo la posibilidad de incluir en dichos convenios medidas de fomento, apoyo y/o de compensación por parte de la administración y las habilitaciones que se consideren necesarias a favor de la entidad colaboradora, para que ésta pueda realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de terceros.

Como Disposición Transitoria se recoge que las funciones que las entidades colaboradoras hayan podido desempeñar durante el año 2023, que se correspondan con las que se relacionan en el presente decreto, puedan ser contempladas en el primer convenio que, en su caso, se suscriba con cada entidad. Como Disposiciones finales se recoge la habilitación normativa a favor del titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y la entrada en vigor a los veinte días de su publicación en el BOCyL.

Incidencia económico-presupuestaria del proyecto de Decreto.

En el apartado 5.1 Impacto económico y presupuestario de la Memoria de 27 de septiembre de 2023, la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se manifiesta que: *“Respecto de los gastos en materia de personal de la consejería, no se estima que de la entrada en vigor del decreto puedan derivarse mayores costes directos e indirectos que deban atenderse con cargo al presupuesto de la Comunidad, ya que la gestión de los trámites señalados en el proyecto para obtener el reconocimiento de condición de entidades colaboradoras se puede realizar con los medios humanos y técnicos actualmente disponibles en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Del mismo modo, la implementación de la tramitación electrónica de este procedimiento se efectuará con personal informático propio de la mencionada Consejería”.*

En la misma Memoria se indica que el coste estimado de las actuaciones que las entidades colaboradoras llevarán a cabo en el ejercicio de las funciones que les atribuye el decreto serán financiadas con cargo al Subprograma 412A01 *“Apoyo a la empresa agraria”* del Presupuesto de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en un nuevo *Subconcepto 780.C7 “Ayudas a Entidades Colaboradoras”*. La dotación prevista para 2024 es de 775.000 euros, a fin de cubrir las obligaciones derivadas de la aplicación del decreto, si bien se precisa que el coste final dependerá de las acciones conveniadas a desarrollar por las Entidades Colaboradoras, que determinarán su importe final, previendo que el gasto anual esté entre 775.000 y 1.000.000 euros.

Esta partida presupuestaria será complementaria de la actual 03.01.412 A01.780.46 *“Organizaciones Profesionales Agrarias”*, con cargo a la que, según indica la misma Secretaría General, se aplicaría el posible gasto derivado de la *Disposición transitoria del proyecto*, -relativa a funciones realizadas en el 2023- mediante la correspondiente transferencia desde esta partida. Se precisa además que, con la aprobación del Decreto, se modificará la Orden de convocatoria de ayudas a OPAS financiada con la aplicación presupuestaria 03.01.G.412A01.780.46, disminuyendo el importe de la convocatoria al destinar estas ayudas exclusivamente a acciones sindicales, por lo que las necesidades de esta partida disminuirán.

En resumen, en la Memoria se estima que el coste máximo de ambas subvenciones para 2024-2026 es de 1.500.000 euros al año, y su distribución final será la que se decida en función de las actividades que correspondan a funciones estrictamente sindicales y las actividades en el ámbito de aplicación del nuevo Decreto de entidades colaboradoras tras la formalización de los convenios del Decreto, que, según la estimación a fecha de la elaboración de esta Memoria, son de en torno a 500.000 euros para la partida 03.01.G.412A01.780.46 *Organizaciones Profesionales Agrarias*, y de 1.000.000 euros para la partida 03.01.G.412A01.780.C *Ayudas a Entidades Colaboradoras*, a partir de 2024.

Además, en la misma Memoria se indican las siguientes cuestiones en relación con las funciones asignadas a las OPAS, como entidades colaboradoras y la actual organización administrativa, y su posible incidencia económico-presupuestaria:

- Respecto a las **funciones recogidas en el art. 4. apartados b) y c)**, corresponden a la tramitación de expedientes administrativos de solicitudes de ayuda en lo referente las novedades de la nueva PAC implantadas en el *Plan Estratégico de la PAC 2023-2027* (PEPAC) y las solicitudes de altas, bajas y modificaciones en los Registros de la Consejería, y especialmente los correspondientes a los nuevos Registros de Explotaciones nacional SIEX y al Cuaderno de Explotación CUEX, que son obligatorias para los agricultores y ganaderos, según los calendarios de los Reales Decretos que lo regulan, y que implican validaciones en relación a la gestión de nutrientes y fitosanitarios principalmente todo ello en formato digital.
- Las entidades colaboradoras podrán, previa autorización de los agricultores, presentar y registrar dichas solicitudes y altas o bajas en registros y cuadernos de explotación. La tramitación es totalmente electrónica, por ello es imprescindible la colaboración de estas entidades con la finalidad de poder cumplir el PEPAC.

En cambio, la labor de las Secciones Agrarias Comarcales y los Servicios Territoriales de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es una labor de supervisión y control de las solicitudes y los registros con posterioridad a ser presentados por los agricultores o entidades colaboradoras autorizadas, con el asesoramiento del técnico que éstas determinen, y una vez registradas las solicitudes de ayudas o solicitudes referentes a registros. Por tanto, el personal de la Administración no cumplimentará lo que les corresponde a los agricultores y ganaderos y las entidades colaboradoras en su nombre. En su caso, podrá proporcionar ayuda a los agricultores y a las entidades

colaboradoras a la hora de su cumplimentación y dudas en estos primeros años de implantación de la nueva PAC.

Por tanto, no existe solapamiento de funciones con tales unidades administrativas, y por supuesto no existe solapamiento de gastos, pues son obligaciones de los agricultores que van a contar con la colaboración de las OPAS.

- Una vez aprobado el Decreto se incluirán las acciones en el *Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2022-2024*.

Examinada la documentación remitida, esta Dirección General considera que el proyecto de Decreto tiene como fin regular los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las OPAS como entidades colaboradoras, y de su instrumentación mediante los correspondientes convenios de colaboración, dentro de la posibilidad regulada en *la Ley 1/2014, de 19 de marzo, agraria de Castilla y León*.

El coste derivado de la propuesta normativa se localiza en la financiación de las acciones objeto de convenio entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las OPAS reconocidas como entidades colaboradoras, y que la misma ha estimado en 775.000 euros para 2024 y entre 775.000 y 1.000.000 euros para los años siguientes, en función del contenido de los convenios que finalmente se firmen.

En cuanto al impacto presupuestario, para 2023 si bien no se cuantifica el coste a asumir por las acciones conveniadas en su caso, la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural manifiesta en su Memoria económica que, en conjunto el coste derivado de las acciones de colaboración conveniadas con las OPAs, y el previsto relativo a las actuales funciones sindicales que ya se paga, se situaría en torno a 1,5 millones de euros anuales, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación presupuestaria	2023		2024	Var.2024/23
	Crédito inicial	Crédito disponible	Previsión *	
03.01.412A01.780.46 OPAS	726.000	242.000	726.000	
03.01.412A01.780C07 Entid. Colaboradoras agrarias			775.000	
Suma	726.000	242.000	1.501.000	775.000

* Según propuesta de presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

A este respecto se precisa que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural deberá implementar las obligaciones derivadas del Decreto con las disponibilidades ordinarias que se aprueben para 2024.

De acuerdo con lo anterior, es cuanto se informa por esta Dirección General en relación con la aprobación del *proyecto de Decreto por el que se regula el reconocimiento de la condición de entidades colaboradoras a las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León*.

En Valladolid, a fecha de firma electrónica
LA DIRECTORA GENERAL,
Fdo.: M. Isabel Campos López.